



Dirección General de Biodiversidad
y Recursos Naturales
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y AGRICULTURA

MEMORIA EJECUTIVA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO

MODIFICACIÓN DE LA LEY 20/1999, DE 3 DE MAYO, DEL PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA Y SU ENTORNO.

Consejería/Órgano proponente	Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura	Fecha inicial	16/12/2021
Título de la norma	Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.		
Tipo de Memoria	<input type="checkbox"/> Extendida <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutiva		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			
Situación que se regula	<ul style="list-style-type: none"> – Habilitación de la declaración responsable para la realización de aprovechamientos forestales de menor cuantía o para la realización de tratamientos selvícolas, aprovechamientos, obras y actuaciones en montes que cuenten con Proyecto de Ordenación, Plan Dasocrático, Plan Técnico, Plan Silvopastoral o Plan Cinegético en vigor, realizados en las condiciones establecidas en los mismos. – Adecuación de la tramitación para la aprobación de los planes rectores de uso gestión a la normativa en vigor. – Clarificación de a quién corresponde informar sobre el valor arquitectónico de las construcciones. – Habilitar al Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) para modificar los límites incluidos en los anexos cartográficos de la ley. 		
Objetivos que se persiguen	<ul style="list-style-type: none"> • Adecuación de esta ley a la normativa autonómica actual • Adecuación de esta ley a la normativa básica estatal • Seguridad jurídica para el administrado habilitando al PRUG para una mejor definición de los límites internos y externos del parque • Simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas en la autorización de aprovechamientos forestales de menor cuantía o para la realización de tratamientos selvícolas, aprovechamientos, obras y actuaciones en montes que cuenten con instrumentos de planificación aprobados y en vigor. 		
Principales alternativas consideradas	En cuanto a la habilitación de la declaración responsable para la realización de aprovechamientos forestales de menor cuantía o para la realización de tratamientos selvícolas, aprovechamientos, obras y actuaciones en montes que cuenten con Proyecto de Ordenación, Plan Dasocrático, Plan Técnico, Plan Silvopastoral o Plan Cinegético en vigor, realizados en las condiciones		



establecidas en los mismos, de las posibles alternativas, se entiende más ventajosa la elegida al simplificar y sustituir el requisito actualmente exigido de autorización por una declaración responsable pues en la aprobación de esos instrumentos de planificación ya informa la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales.

Por otro lado, es necesario introducir en el texto de la ley cómo se aprueba un Plan Rector de Uso y Gestión, por Decreto del Consejo de Gobierno; si no se adecúa la tramitación para la aprobación de estos planes a la normativa en vigor, la tramitación de estos instrumentos de planificación podría dar lugar a situaciones contradictorias en cuanto al trámite a seguir según esta ley y según lo establecido en la ley de procedimiento administrativo aprobada muy posteriormente.

En cuanto a habilitar al PRUG para modificar los anexos cartográficos de la ley para una mejor definición de los mismos, mayor resolución, menor escala y en coherencia con los límites establecidos para los espacios red Natura 2000 con los que estos espacios se solapan, la alternativa elegida es la adecuada al ser inviable el requerir modificar una ley para realizar los ajustes cartográficos que requiere una cartografía publicada a una escala muy amplia, con muy baja resolución y sin soporte de los Sistemas de Información Geográfica actuales.

En cuanto al resto de cuestiones reguladas, la alternativa de mantenimiento del texto actual genera confusión al administrado y a los técnicos encargados de aplicar estos preceptos, siendo la clarificación de los mismos la mejor alternativa. Se considera, por tanto, adecuado clarificar quién ha de informar la existencia de valor arquitectónico de una construcción.

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO

Tipo de norma	Ley
Estructura de la Norma	La modificación propuesta incluye la modificación de la redacción, eliminación o inclusión de nuevos apartados en tres artículos de la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno cuyo contenido se recoge en el epígrafe 3.
Informes a recabar	<p>- Informes preceptivos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.</p> <p>Informes necesarios pendientes de solicitar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. - Informe de las Secretarías Generales Técnicas. - Informes de impacto presupuestario y de recursos humanos. - Informe de calidad normativa de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia. - Informes de impactos: género, familia, infancia, adolescencia, orientación sexual, identidad o expresión de género y no discriminación. - Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.



	<p>- Informe del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.</p>
<p>Trámite de consulta y de audiencia/Información Públicas</p>	<p>Se someterá a estos trámites de conformidad con lo dispuesto el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Publicas, así como del artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.</p> <p>En particular, se someterá a trámite de audiencia dando traslado del proyecto normativo a las siguientes entidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COLEGIO INGENIEROS DE MONTES • COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS AGRICOLAS • COLEGIO INGENIEROS AGRÓNOMOS • COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES • CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) • CEOE-COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE • CEOE-CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-(CEIM) • CEOS- (CEIM) COMISIÓN DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE • CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID • CEPYME-CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA • FEDERACIÓN MADRILEÑA MUNICIPIOS • ECOLOGISTAS EN ACCION • SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología) • WWF España (World Wildlife Fund España) • BRINZAL (Centro de Recuperación para Rapaces Nocturnas) • GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat) • FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL (ámbito nacional) • ASOCIACIÓN SIERRA CARPETANIA (Difusion cultural de la CM) • FUNDACIÓN GLOBAL NATURE • ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA • ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas) • ASEMFO (Asociación Nacional de Empresas Forestales) • ASERPYMA (Asociación de empresas restauradoras de paisajes y medio ambiente) • ASEJA (Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines) • COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España) • ASFOCAM - Asociación Forestal de la Comunidad de Madrid
<p>ANÁLISIS DE IMPACTOS</p>	



ADECUACIÓN ORDEN COMPETENCIAS	AL DE	Esta disposición se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.
IMPACTO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO	Y	<p>Efectos sobre la economía en general</p> <p>Del contenido del proyecto no se deriva incidencia directa significativa sobre la economía general.</p>
		<p>En relación con la competencia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia.</p> <p><input type="checkbox"/> La norma tiene efectos positivos sobre la competencia.</p> <p><input type="checkbox"/> La norma tiene efectos negativos sobre la competencia.</p>
		<p>Desde el punto de vista de las cargas administrativas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Supone una reducción de cargas administrativas.</p> <p>Cuantificación estimada: 4.330,00 €</p> <p><input type="checkbox"/> Incorpora nuevas cargas administrativas.</p> <p>Cuantificación estimada: poner en euros €</p> <p><input type="checkbox"/> No afecta a las cargas administrativas.</p>
		<p>Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid</p> <p><input type="checkbox"/> No afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid.</p> <p><input type="checkbox"/> Implica un gasto.</p> <p>Cuantificación estimada:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Implica una minoración de ingresos (en concepto de tasas):</p> <p>Cuantificación estimada: 393,70 €</p>
IMPACTOS SOCIALES		<p>La norma tiene un impacto de género</p> <p><input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/> Positivo</p>



	La norma tiene un impacto de familia, infancia y adolescencia	<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/> Positivo
	Informe sobre su impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género	<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/> Positivo
OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS	Impacto favorable sobre el medio ambiente y el medio rural.	
OTRAS CONSIDERACIONES	Ninguna	



MEMORIA EJECUTIVA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 20/1999, DE 3 DE MAYO, DEL PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA Y SU ENTORNO.

ÍNDICE

1. FINES, OBJETIVOS, OPORTUNIDAD Y LEGALIDAD
 - 1.1. FINES
 - 1.2. OBJETIVOS
 - 1.3. OPORTUNIDAD
 - 1.4. LEGALIDAD DE LA NORMA
 - 1.5. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS.
2. CONTENIDO DE LA NORMA
3. ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN
4. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO COMPETENCIAL PREVALENTE
5. LISTADO DE NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS
6. IMPACTO ECONÓMICO –PRESUPUESTARIO E IMPACTOS SOCIALES
 - 6.1. Impacto económico – presupuestario
 - 6.1.1. Impacto económico general
 - 6.1.2. Efectos en la competencia del mercado
 - 6.1.3. Análisis de cargas administrativas
 - 6.1.4. Impacto presupuestario
 - 6.2. Impactos Sociales
 - 6.2.1. Impacto por razón de género
 - 6.2.2. Impacto sobre la infancia, adolescencia y la familia.
 - 6.2.3. Impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.
7. OTROS IMPACTOS.
8. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS



1. FINES, OBJETIVOS, OPORTUNIDAD Y LEGALIDAD

1.1. Fines

La modificación que se propone responde a fines de interés público como es contar con una regulación autonómica acorde con la normativa autonómica posterior, con la normativa básica estatal y que responda a las necesidades actuales de gestión para la protección de los ecosistemas forestales y, por ende, de sus valores asociados (económicos, ambientales, sociales, etc.).

1.2. Objetivos

Con la aplicación efectiva de la modificación normativa se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

- Adecuación de la norma autonómica a la normativa autonómica posterior en materia de procedimiento administrativo, a la normativa básica estatal en materia forestal y de espacios protegidos, así como la clarificación de conceptos en aras a una mayor seguridad jurídica en la aplicación de esta norma y a una racionalización de su contenido.
- Simplificación del procedimiento de modificación del anexo cartográfico de la ley que define los límites externos y de la zonificación interna, a una escala que resulte con detalle insuficiente para la gestión, con el fin de adecuar su definición a las mejores tecnologías de que se dispone en este momento y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios de los terrenos afectados y colindantes, permitiendo que los mismos puedan ser modificados por Decreto de aprobación del PRUG.
- Reducción de cargas administrativas en materia de aprovechamientos forestales, tratamientos selvícolas y actuaciones aprobadas en proyectos de ordenación, planes dasocráticos, planes técnicos, planes silvopastorales y planes cinegéticos, de manera que no cualquier tipo de aprovechamiento o de cualquier cuantía, o no cualquier tipo de actuación, tratamiento selvícola u obra esté sometida a autorización, sino que se module el régimen de intervención administrativa en aras del principio de proporcionalidad, aplicando nuevas técnicas introducidas por la Directiva 2006/123/CE de Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior y su transposición al ordenamiento jurídico español, lo cual supondrá una mayor agilidad en la gestión y una reducción en los costes de tasas para la ciudadanía.

1.3. Oportunidad de la norma

Con la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, esta Comunidad ejerció la facultad legislativa en esta materia que el Estatuto de Autonomía le había otorgado, en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establecía en aquel momento (Ley 15/1975, de 2 de mayo, de



espacios naturales protegidos), en materia de protección del medio ambiente, protección de los ecosistemas

En los más de veintidós años transcurridos desde su entrada en vigor, se ha producido una modificación del marco legislativo básico en materia de procedimiento administrativo y en materia de espacios protegidos, especialmente tras la promulgación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad modificada posteriormente por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre. Esta ley vino a derogar y sustituir a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres que, a su vez, en parte procedía de la Ley de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales Protegidos, y a las sucesivas modificaciones de aquélla.

Especial interés tiene en el nuevo marco normativo básico la consideración de los planes rectores de uso y gestión y donde se fijarán las normas generales de uso y gestión del Parque, teniendo su contenido prevalencia sobre planeamiento urbanístico según lo establecido en el artículo 31 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Actualizar la tramitación de la aprobación de este instrumento de planificación, que serán periódicamente revisados, a la normativa actual en temas de procedimiento administrativo es importante de cara a evitar posibles incompatibilidades en su tramitación que lleven a defectos de forma en este trámite.

Por otro lado, la delimitación de los espacios protegidos en cuanto a su zonificación interna y sus límites externos no cuenta con una materialización física sobre el terreno, tal y como se determina, por ejemplo, a través de los procedimientos de deslinde y amojonamiento de los montes catalogados de utilidad pública, sino que la única referencia para su localización es la descripción de los límites establecida en su articulado y la representación gráfica incluida en el anexo cartográfico de esta ley, a escala 1:10.000, que se elaboró con las herramientas con las que se contaba en los años noventa del siglo pasado y cuya precisión dista mucho de la que las nuevas tecnologías ofrecen actualmente. Estas escalas de trabajo resultan insuficientes, habiéndose comprobado a lo largo del tiempo desajustes entre el anexo y la realidad física de los terrenos. Dado que la modificación de dicho anexo únicamente es posible a día de hoy a través de una norma con rango de Ley, y que el proceso de ajuste cartográfico es un proceso dinámico, este obstáculo para su modificación dificulta enormemente el análisis de afecciones de programas, planes y proyectos a los valores propios de la competencia de esta administración y resulta un impedimento para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios de los terrenos incluidos en el espacio y de los terrenos colindantes.

Por otra parte, en la normativa básica en materia de montes se recogen las condiciones básicas para la regulación de los aprovechamientos maderables y leñosos en montes no gestionados por el órgano forestal de la comunidad autónoma (art. 37 de la Ley 43/2003, de Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes), recogiendo expresamente la declaración responsable como el instrumento para el control de los aprovechamientos en montes que cuenten con instrumentos de planificación en vigor o cuando se trate de aprovechamientos de menor cuantía, estableciendo el requisito de autorización previa en el resto de los casos. Se trasladan estos preceptos de la legislación básica en materia de montes a esta ley con el objeto de aligerar cargas a los administrados, al requerir una declaración responsable en



lugar de autorización, para la ejecución de aprovechamientos de menor cuantía o aprovechamientos, tratamientos selvícolas, obras o actuaciones ya contempladas en instrumentos de planificación (proyectos de ordenación, planes dasocráticos, planes técnicos, planes silvopastorales y planes cinegéticos) aprobados por esta administración y en vigor.

Debe tenerse en cuenta que desde 1999 ha tenido lugar una notable evolución social en la que cabe destacar, por lo que afecta al objeto de la norma ahora propuesta, cómo se han agudizado los procesos de éxodo poblacional desde las zonas rurales a los núcleos urbanos que ha venido produciéndose durante la segunda mitad del siglo XX, lo que ha provocado un notable descenso de la presión humana tradicional sobre la componente productora de los montes. Estos procesos se han dejado sentir especialmente en las zonas más periféricas de la Comunidad, donde la disminución de la presión humana para el aprovechamiento tradicional de leñas se puede considerar una de las causas del notable incremento de los terrenos forestales, tanto en superficie como en biomasa acumulada, también impulsado por actuaciones de repoblación forestal y por el crecimiento y expansión natural de las masas.

Así en el lapso entre 1990¹ y 2019², la superficie forestal total de la Comunidad de Madrid sufrió las siguientes variaciones:

- La superficie forestal en total ha pasado del 49% al 55% del territorio de la Comunidad (actualmente asciende a 442.416 ha).
- La superficie ocupada por montes arbolados ha aumentado en un 42% (163.582 ha en 1990 y 232.218 en 2019).

Además, comparando los datos disponibles de los inventarios forestales nacionales, se observa una tendencia creciente de las existencias en volumen de biomasa arbórea por hectárea, pasando de 33 m³/ha en el año 1974 a 40,3m³/ha en el año 2000. Este incremento de biomasa se puede relacionar, en parte, con un incremento del riesgo de incendios forestales en la región, por lo cual las labores tradicionales de cortas fitosanitarias (las llamadas de policía), o de mejora o de regeneración de las masas (aprovechamientos), poda y desbroce de fincas particulares adquieren mayor interés para la prevención.

En particular, los aprovechamientos forestales de leñas en fincas particulares suelen ser de menor cuantía, con fines de autoconsumo, y vienen ejecutándose en buena parte por una población envejecida a las que les resulta dificultosa la tramitación de las preceptivas autorizaciones.

Las cargas administrativas derivadas del procedimiento de autorización, tasas asociadas y plazos establecidos, no contribuyen a dinamizar estos pequeños aprovechamientos en fincas particulares de los cuales, además, es innegable su interés como labor preventiva de incendios forestales, por lo que parece oportuna su simplificación y aplicación a todo el ámbito del parque.

¹ Fecha de referencia del Segundo Inventario Forestal Nacional

² Fecha de referencia del Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid 2020.



De igual manera, los aprovechamientos, tratamientos selvícolas, obras o actuaciones incluidas en documentos de planificación (proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos, planes técnicos, planes silvopastorales o planes cinegéticos) aprobados por esta administración medioambiental y en vigor, en todo el ámbito del parque regional, no requerirán de autorización para la ejecución de los mismos y tan solo será necesaria la presentación previa de una declaración responsable ante esta administración, para llevarlos a cabo. Hay que tener en cuenta que esta administración aprueba el contenido de estos planes y que resulta recurrente el que requiera de nueva autorización una actuación que ya se ha autorizado previamente al aprobar el instrumento de planificación en el que está incluido. Obviamente, las actuaciones no recogidas en estos planes o que se quieran ejecutar en condiciones diferentes a las recogidas en los mismos, requerirán de la correspondiente autorización, pues sólo se exceptúan de la misma con la modificación propuesta, los aprovechamientos de menor cuantía y las actuaciones recogidas en los planes anteriormente mencionados aprobados y en vigor.

Resulta necesario, además, de cara a una mejor gestión del territorio y para dar mayor seguridad jurídica al administrado y a los técnicos que se encargan interpretar el contenido de esta ley, clarificar ciertos contenidos de la misma. Así es el caso de lo que considera valor arquitectónico de cara a aplicar el artículo 9.4.e), en el que se establece que los edificios con valor arquitectónico podrán rehabilitarse para su conservación incluso con destino residencial y hostelero. Establecer qué administración ha de informar favorablemente este valor es el propósito de esta modificación.

Además, es necesario introducir en el texto de la ley cómo se aprueba un Plan Rector de Uso y Gestión, por Decreto del Consejo de Gobierno; si no se adecúa la tramitación para la aprobación de estos planes a la normativa en vigor, la tramitación de estos instrumentos de planificación podría dar lugar a situaciones contradictorias en cuanto al trámite a seguir según esta ley y según lo establecido en la normativa aprobada posteriormente, además de ser diferente el procedimiento establecido en cada uno de los parques regionales; con esta modificación se trata de homogeneizar la aprobación de este instrumento de planificación a nivel regional.

También hay que tener en cuenta que en estos años se han producido cambios importantes que afectan a los procedimientos administrativos y a la administración pública en su conjunto, tales como:

- La aprobación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
- La progresiva implantación de la administración electrónica.
- La nueva legislación en materia de procedimiento administrativo.

A la vista de lo expuesto, resulta evidente la conveniencia y necesidad de modificar la legislación autonómica en materia de espacios protegidos, en concreto la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, vigente en la Comunidad de Madrid desde 1999, para que dé respuesta a las necesidades actuales de gestión del espacio protegido con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la citada Ley.



1.4. Legalidad de la norma

Se trata de una propuesta con rango de ley, el mismo que la norma cuya modificación se plantea.

1.5. Análisis de alternativas

Se han analizado distintas alternativas, relativas a la derogación, mantenimiento o modificación de la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.

La alternativa de derogar la ley queda descartada, como se ha indicado, al establecerse en la misma norma, preceptos necesarios para la protección y administración del parque.

La alternativa de mantener la actual redacción de la ley conlleva la persistencia de los problemas detectados en su aplicación, por lo que se opta por proponer la modificación mínima necesaria para solventar dichos problemas y con objeto, entre otros aspectos ya señalados, de reducir las cargas administrativas, la seguridad jurídica de los procedimientos derivados de la citada norma, la racionalización y clarificación de aspectos concretos puesto que se trata de una norma del año 1999.

De las posibles alternativas en la regulación de aprovechamientos forestales, tratamientos selvícolas, obras y actuaciones aprobadas dentro de instrumentos de planificación ya aprobados y en vigor, se entiende más ventajosa el simplificar y sustituir en algunos casos el requisito actualmente exigido de autorización previa por una declaración responsable.

La posibilidad de supresión total de los regímenes de autorización en materia de aprovechamientos forestales resulta inviable por contradecir la legislación básica estatal en materia forestal y otorgar además un medio de control fundado en una razón imperiosa de interés general: la protección del medio ambiente.

2. CONTENIDO DE LA NORMA

La modificación propuesta incluye: la modificación de la redacción, eliminación o inclusión de nuevos apartados en tres artículos de la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.

A continuación, se recoge la redacción actual y propuesta de los citados artículos o apartados:

- **Artículo 1**, se añade un párrafo:

Nueva redacción propuesta:

Las representaciones gráficas incluidas en este anexo podrán ser modificadas por el Plan Rector de Uso y Gestión para incrementar su precisión y escala, y ajustar sus límites a la



realidad de los valores naturales presentes en el territorio de conformidad con lo establecido en la legislación básica. Se utilizará para ello toda la información disponible para el ámbito objeto de planificación, así como bases cartográficas de mayor resolución y detalle, aprovechando las mejoras técnicas que proporcionan los Sistemas de Información Geográfica actuales. Estos límites habrán de ser coherentes con los límites establecidos para los espacios protegidos Red Natura 2000 con los que se solapan.

- **Artículo 9.4.e)**, se añade un párrafo a la redacción actual, dice el artículo 9.4: En todo caso se considerarán usos y actividades compatibles con el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, los siguientes.

Redacción actual:

e) La rehabilitación para su conservación incluso con destino residencial y hostelero, de edificios de valor arquitectónico, aun cuando se encontraran en situación de fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente incluir las obras de ampliación indispensables para las condiciones de habitabilidad

Nueva redacción propuesta:

e) La rehabilitación para su conservación incluso con destino residencial y hostelero, de edificios de valor arquitectónico, aun cuando se encontraran en situación de fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente incluir las obras de ampliación indispensables para las condiciones de habitabilidad. El valor arquitectónico de los edificios vendrá establecido por informe favorable de la administración competente en materia de arquitectura de la Comunidad de Madrid.

- **Artículo 9.4**, se añade un nuevo apartado (f). El artículo 9.4 establece que en todo caso se considerarán usos y actividades compatibles con el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno, los siguientes.

Nueva redacción propuesta:

f) La ejecución de tratamientos selvícolas, aprovechamientos forestales, obras y actuaciones en montes que cuenten con Proyecto de Ordenación, Plan Dasocrático, Plan Técnico, Plan Silvopastoral o Plan Cinegético en vigor, realizados en las condiciones establecidas en los mismos, para lo que será necesaria la previa presentación de una declaración responsable ante la administración competente en materia de espacios protegidos de la Comunidad de Madrid.

De igual manera, la ejecución de aprovechamientos leñosos domésticos de menor cuantía, definidos estos en la normativa básica estatal en materia de montes, requerirá de la previa declaración responsable ante la administración competente en materia de espacios protegidos.

- **Artículo 9.4**, se añade una frase al último párrafo



Redacción actual:

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación en las Zonas de Máxima Protección de este Parque Regional, que se regirán por lo dispuesto en esta Ley para dichas zonas.

Nueva redacción propuesta:

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación en las Zonas de Máxima Protección de este Parque Regional, que se regirán por lo dispuesto en esta Ley para dichas zonas, excepto lo dispuesto en el apartado f) que será de aplicación en todo el Parque Regional.

- **Apartado 3 del artículo 12**, se modifica

Redacción actual:

En el plazo máximo de doce meses, desde la entrada en vigor de esta Ley, deberá aprobarse mediante Decreto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, un Plan Rector de Uso y Gestión, que será revisado con una periodicidad de cuatro años

Nueva redacción propuesta:

El Plan Rector de Uso y Gestión se aprobará por Decreto del Consejo de Gobierno

- **Apartado 5 del artículo 12**, se modifica

Redacción actual

El Plan Rector de Uso y Gestión será elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, que podrá recabar la colaboración de otras Consejerías de la Comunidad de Madrid, de la Junta Rectora del Parque y de otros organismos públicos, y será informado preceptivamente por la Junta Rectora del Parque

Nueva redacción propuesta:

El Plan Rector de Uso y Gestión será elaborado por la Consejería competente en materia de espacios protegidos.

3. ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN

De acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, este proyecto normativo se adecúa a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia

La necesidad de la presente propuesta ha quedado ampliamente motivada por la necesaria adecuación de una normativa autonómica antigua a la normativa posterior y en concreto a la normativa básica estatal. Es necesario proporcionar mayor seguridad jurídica a los administrados en cuanto a la mejor definición de los límites internos y externos del parque a



través del PRUG que se aprobará por Decreto del Consejo de Gobierno. Simplificamos procedimientos y reducimos cargas administrativas en la gestión de aprovechamientos forestales, tratamientos selvícolas, obras y actuaciones ya aprobadas dentro de instrumentos de planificación aprobados y vigente, así como los aprovechamientos de menor cuantía.

Del mismo modo, su adopción responde al principio de proporcionalidad, ya que la iniciativa requiere medios mínimos para la cobertura de las necesidades expresadas. La solución jurídica propuesta, con rango de ley, es proporcional en cuanto que lo que se pretende es la modificación de una norma del mismo rango. Como se ha indicado, la regulación contenida en la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, es imprescindible a sus fines, por lo que debe mantenerse. No obstante, se hace necesario actualizar, racionalizar y mejorar ciertos aspectos de la misma.

Las modificaciones planteadas buscan resolver problemas detectados en la aplicación de la norma vigente con la mínima regulación posible. Así mismo, se constata que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, ya que se ha optado por un régimen de intervención mínimo a través de la presentación de declaraciones responsables para la ejecución de aprovechamientos de menor cuantía, definidos así en la legislación básica estatal y en buena parte de los aprovechamientos forestales, tratamientos selvícolas, obras y actuaciones ya incluidas en instrumentos de planificación aprobados y vigentes; manteniéndose únicamente el régimen de autorización administrativa para aquellas actuaciones no incluidas en los instrumentos de planificación (proyectos de ordenación, planes dasocráticos, planes técnicos, planes silvopastorales y planes cinegéticos) para garantizar con control suficiente, los usos y aprovechamientos sobre los terrenos forestales.

Se cumplirá, igualmente, con el principio de seguridad jurídica, formalmente con la plasmación de la actuación en una norma que será objeto de publicación, y materialmente por la fijación en ella de los criterios y del procedimiento establecido en el Acuerdo de 5 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las instrucciones generales para la aplicación del procedimiento para el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria del Consejo de Gobierno, siempre cumpliendo con el principio de transparencia por medio de la información a los ciudadanos y su participación.

En cuanto a la transparencia, como se irá reflejando paulatinamente en el apartado 9 de esta memoria a medida que avance la tramitación de este anteproyecto de ley, el mismo ha sido sometido al trámite de consulta previa, y lo será en adelante a los trámites de audiencia, información pública y participación a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, garantizándose así el cumplimiento del mandato de transparencia en el proceso de elaboración de la norma.

Asimismo, se dará traslado del proyecto a las siguientes entidades:

- COLEGIO INGENIEROS DE MONTES
- COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS AGRICOLAS
- COLEGIO INGENIEROS AGRÓNOMOS
- COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES



- CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE)
- CEOE-COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
- CEOE-CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-(CEIM)
- CEOS- (CEIM) COMISIÓN DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE
- CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
- CEPYME-CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
- FEDERACIÓN MADRILEÑA MUNICIPIOS
- ECOLOGISTAS EN ACCION
- SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología)
- WWF España (World Wildlife Fund España)
- BRINZAL (Centro de Recuperación para Rapaces Nocturnas)
- GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat)
- FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL (ámbito nacional)
- ASOCIACIÓN SIERRA CARPETANIA (Difusion cultural de la CM)
- FUNDACIÓN GLOBAL NATURE
- ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA
- ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas)
- ASEMFO (Asociación Nacional de Empresas Forestales)
- ASERPYMA (Asociación de empresas restauradoras de paisajes y medio ambiente)
- ASEJA (Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines)
- COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España)
- ASFOCAM - Asociación Forestal de la Comunidad de Madrid

Finalmente, el principio de eficiencia se evidencia en el hecho de que se propone la mejora del procedimiento, con la reducción de cargas administrativas asociadas al mismo y el aumento de su seguridad jurídica, con la regulación imprescindible para ello.

4. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO COMPETENCIAL PREVALENTE

La competencia para la aprobación de esta ley está prevista en el artículo 27.7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que atribuye a la misma, en el marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso, en los términos que la misma establezca, el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución en materia de protección del medio ambiente y protección de los ecosistemas.

En concreto, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, corresponde el ejercicio de esta competencia a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de conformidad con lo establecido en el DECRETO 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid (modificada por Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid).



5. LISTADO DE NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS

El proyecto de Ley presentado en cuanto a la modificación de la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, supone la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma.

6. IMPACTO ECONÓMICO –PRESUPUESTARIO E IMPACTOS SOCIALES

6.1. Impacto económico – presupuestario

6.1.1. Impacto económico general

La modificación de la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, no tiene un impacto económico directo significativo. Sí tendrá un limitado impacto económico positivo para los interesados al modificar el régimen de intervención administrativa para algunos aprovechamientos forestales, tratamientos selvícolas, obras y otras actuaciones ya incluidas en instrumentos de planificación aprobados y vigentes, lo que, por otra parte, derivará en la no aplicación de las tasas derivadas del procedimiento administrativo de autorización al que actualmente están sometidos. Esta misma circunstancia llevará implícita la reducción de ingresos en la Comunidad de Madrid en concepto de tasas, que de media viene se estima en unos 393,70 € al año (ver cálculo en apartado 6.1.4).

No se aprecia que la norma pueda tener efecto en la productividad de las personas trabajadoras y empresas (en particular las PYMES), el empleo o la innovación.

La reducción de los costes para el administrado asociado al pago de las tasas por autorización del aprovechamiento se correspondería con un ahorro medio de la tasa de 6,35 € por cada 20 estéreos de leña, cuyo valor de mercado medio puede establecerse en unos 700 €, lo cual tendría una repercusión escasamente significativa; se considera, por tanto, que la modificación propuesta no tendrá un impacto significativo en los precios de los productos y servicios ni en los consumidores.

6.1.2. Efectos en la competencia en el mercado

La norma no establece nuevas condiciones que puedan tener efectos sobre la competencia en el mercado ya que no introduce restricciones al acceso de nuevos operadores ni limita la libertad o los incentivos de los mismos para competir.

6.1.3. Análisis de las cargas administrativas

La modificación que se pretende redundará en una eliminación o simplificación de cargas para el administrado pues con la regulación establecida hasta ahora venían obligados a obtener autorización para la ejecución de actuaciones ya previamente aprobadas por esta



administración en sus correspondientes instrumentos de planificación. Por otro lado, al reducirse el grado de intervención administrativa, se reduce también la carga derivada de la obligación de recibir requerimientos, y el coste en asesoría y gestión administrativa para su cumplimiento, en su caso.

Por otro lado, clarificar la localización de los límites, tanto de zonificación interna como externa, redundará en una mayor seguridad jurídica de los administrados y evitará el que tengan que realizar consultas para saber dónde se encuentra su parcela respecto a los límites del parque y respecto a la zonificación interna, pues de esa ubicación depende la regulación de usos que rige sobre dicha parcela.

Se presentan a continuación los cálculos de las cargas según la “Guía metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo”, aprobada por Acuerdo de 11 de diciembre de 2009, del Consejo de Ministros.

Como se puede observar, la reducción de cargas se cuantificaría entre 268 € y 4.330 €, dependiendo de si la tramitación fuera electrónica en todos los casos o si la tramitación fuera completamente presencial. Realmente, este tipo de aprovechamientos vienen solicitándose mayoritariamente de manera presencial ya que, debido a la avanzada edad de buena parte de los interesados en este tipo de aprovechamientos tradicionales y a la brecha tecnológica que aún se percibe en el mundo rural, prefieren no relacionarse telemáticamente con las Administraciones, no siendo sujetos obligados a ello.

La modificación que se pretende, además, incidirá en la disminución de los tiempos de tramitación por parte del personal adscrito la unidad administrativa responsable del procedimiento de autorización de aprovechamientos forestales o tratamientos selvícolas, obras u otras actuaciones ya incluidas en instrumentos de planificación aprobados, y de los costes asociados a dicha tramitación.

Analizando datos de los últimos años, se vienen resolviendo una media de 62 expedientes de aprovechamientos en fincas particulares al año dentro del territorio del parque. El número de expedientes de aprovechamiento forestal que, de acuerdo a la media de los últimos años, pasaría de autorización a declaración responsable por tratarse de aprovechamientos de leñas o maderas de menor cuantía se estima en unos 41 al año.

Por tanto, se estima que para la administración supondrá una reducción de cargas de alrededor del 66 por ciento en el número de autorizaciones que se emiten en el territorio del parque, y por tanto aumenta la posibilidad de destinar recursos humanos y técnicos a agilizar los procedimientos en curso relativos a la protección activa o preventiva de estos espacios protegidos.





en www.madrid.org/csv
259365547591815813709

en www.madrid.org/csv
259365547591815813709

autentica
liante

autentica
liante



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código de verificación: **124365547591815813709**

DIFERENCIA ENTRE CARGAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN LA REGULACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA

Ley	Artículo	Nombre del apartado	Coste unitario		Coste anual	
			Presencial	Telemático	Presencial	Telemático
Ley 20/1999	9.4.f)	Aprovechamientos, tratamientos selvícolas	-50,00 €	-3,00 €	-4.330,00 €	-268,00 €
TOTAL					-4.330,00 €	-268,00 €

Otro impacto a valorar es la previsible reducción del número de denuncias por aprovechamientos forestales, tratamientos selvícolas, obras y actuaciones en fincas privadas sin autorización previa que viene oscilando entre un 15 y un 35 por ciento sobre el total de las denuncias tramitadas cada año en materia de montes en concepto de corta, poda o arranque de vegetación sin la preceptiva autorización.

6.1.4. Impacto presupuestario

Para valorar la repercusión y los efectos del anteproyecto de ley sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, así como en general su impacto presupuestario, debe tenerse en cuenta que la futura norma es una disposición general cuyo contenido se refiere a derecho sustantivo regulador de las actividades humanas sobre los recursos forestales.

Más allá de ello, dado que en buena parte se trata de una simplificación de procedimientos administrativos, la aprobación de este anteproyecto de ley no generaría nuevas necesidades de personal y recursos materiales de la administración pública, de forma singular en el ámbito de la consejería competente en materia de espacios protegidos.

Por otra parte, como consecuencia de la modificación del régimen de intervención administrativa en algunos de los aprovechamientos forestales dejarían de ingresarse las tasas asociadas a los procedimientos de autorización que pasan a declaración responsable o libres según lo expresado en la siguiente tabla. El importe calculado de dichas tasas ascendería a 393,70 €.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, simultáneamente a la modificación propuesta de la Ley 20/1999, de 3 de mayo, del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, se propone también la modificación del Decreto legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Comunidad de Madrid y que en ella se propone eliminar, entre otras, las tasas que aplicarían en este caso. Si dicha modificación tuviera lugar, el impacto presupuestario de la modificación de esta ley sería nulo en cuanto al cese de ingresos por concepto de tasas, por lo que debe tenerse la prevención de no contabilizarlo doblemente.





Dirección General de Biodiversidad
y Recursos Naturales
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y AGRICULTURA



en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1259365547591815813709**

Ley	Tipo aprovechamiento	Artículo	Nombre del apartado	Trámite	Nº de solicitudes al año	Importe medio de la tarifa compuesta que se viene liquidando	Importe total
DECRETO LEGISLATIVO 1/2002, de 24 de octubre	Aprovechamientos, tratamientos selvícolas	197 (tarifa 3416)	3408.4 Señalamiento	Tasas	62	6,35 €	393,70 €
			3407 Medición (optativa)				
			3411 Reconocimiento final				
TOTAL							393,70 €

En cuanto a la evaluación del impacto presupuestario en lo relativo a los presupuestos municipales, no nace de este anteproyecto de ley ninguna obligación presupuestaria adicional para los Ayuntamientos.

Tampoco se establecen condiciones que puedan repercutir sobre los Presupuestos Generales del Estado.

6.2. Impactos Sociales

6.2.1. Impacto por razón de género

En el marco de los objetivos de la acción comunitaria prevista para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas estableció la obligatoriedad, en los procedimientos de elaboración de proyectos de ley y reglamentos, de incorporar un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en los mismos. Por ello se procede a solicitar informe a la Dirección General de Igualdad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

6.2.2. Impacto sobre la infancia, adolescencia y la familia.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, modificadas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia disponen que las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia. Por ello se procede a solicitar informe a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

6.2.3. Impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

De conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y el artículo 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid deberán contar con carácter preceptivo con un informe sobre su impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Por ello se procede a solicitar informe a la Dirección General de Igualdad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

7. OTROS IMPACTOS.

7.1. Impactos medioambientales



En la elaboración de este anteproyecto se ha tenido en cuenta la necesidad de garantizar la protección del medio ambiente, sostenibilidad de los recursos naturales y el estado de conservación favorable de los ecosistemas forestales, lo cual es especialmente relevante como herramienta para la captura de carbono y la mitigación del cambio climático

7.2. Impactos de accesibilidad

No supone impacto.

7.3. Impactos de salud

El impacto sobre la salud de la disposición, al contribuir a la protección de las masas forestales y, por tanto, a los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques a la sociedad en su conjunto, es claramente positivo.

8. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid, se identifican los siguientes trámites necesarios:

- a) Consulta pública
- b) Solicitud simultánea de informes preceptivos y otras consultas que se estimen convenientes.

A este respecto, dentro de esta Consejería se entiende que el proyecto normativo deberá trasladarse para informe al Consejo de Medio Ambiente, de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 2 del Decreto 103/1996, de 4 de julio, por el que se crea el Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

- c) Trámite de audiencia e información públicas.

Se someterá a estos trámites de conformidad con lo dispuesto el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como del artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

En particular, se someterá a trámite de audiencia dando traslado del proyecto normativo a las siguientes entidades:

- COLEGIO INGENIEROS DE MONTES
- COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS AGRICOLAS
- COLEGIO INGENIEROS AGRÓNOMOS
- COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES
- CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE)
- CEOE-COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE



- CEOE-CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-(CEIM)
- CEOS- (CEIM) COMISIÓN DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE
- CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
- CEPYME-CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
- FEDERACIÓN MADRILEÑA MUNICIPIOS
- ECOLOGISTAS EN ACCION
- SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología)
- WWF España (World Wildlife Fund España)
- BRINZAL (Centro de Recuperación para Rapaces Nocturnas)
- GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat)
- FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL (ámbito nacional)
- ASOCIACIÓN SIERRA CARPETANIA (Difusion cultural de la CM)
- FUNDACIÓN GLOBAL NATURE
- ASOCIACIÓN HERPETOLÓGICA ESPAÑOLA
- ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas)
- ASEMFO (Asociación Nacional de Empresas Forestales)
- ASERPYMA (Asociación de empresas restauradoras de paisajes y medio ambiente)
- ASEJA (Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines)
- COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España)
- ASFOCAM - Asociación Forestal de la Comunidad de Madrid

d) Informe de la Secretaría General Técnica de la consejería proponente.

e) Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid-.

En Madrid, a fecha de firma

EL DIRECTOR GENERAL DE BIODIVERSIDAD
Y RECURSOS NATURALES

